

MINISTRO PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PRESENTE.-

[REDACTED], de generales conocidas como parte quejosa y recurrente en el Amparo en Revisión número [REDACTED] del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito Judicial, y señalando domicilio para efecto de oír y recibir notificaciones en la calle [REDACTED]

[REDACTED] comparezco y expongo:

Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 215, 216, párrafo segundo, 225, 226, fracción II, penúltimo y último párrafo, 227, fracción II y relativos de la Ley de Amparo, ocurro a presentar DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE TESIS, entre las sustentadas por los siguientes Tribunales Colegiados, de diversos Circuitos Judiciales, que son:

- A ① AMPARO EN REVISIÓN [REDACTED] DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO JUDICIAL.
- A ① AMPARO EN REVISIÓN [REDACTED] DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO JUDICIAL.
- P ① AMPARO EN REVISIÓN [REDACTED] DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMONOVENO CIRCUITO JUDICIAL.
- A ① QUEJA [REDACTED] DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO JUDICIAL.
- A ① AMPARO EN REVISIÓN [REDACTED] DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO JUDICIAL.

LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIAR:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 226, fracción II y 227, fracción II de la Ley de Amparo, las partes en los asuntos que motivaren criterios discrepantes con los sostenidos por tribunales colegiados de diferente circuito, están legitimadas para denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dilucidar, en Pleno o en Salas.

Así, acudo en este acto, a Denunciar la Contradicción de Tesis, como parte quejosa en el Amparo en Revisión [REDACTED] del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito Judicial.

CRITERIOS DISCREPANTES:

Los criterios discrepan en la aplicación de medidas de no repetición y aplicación en el juicio de amparo de las medidas de no repetición, la obligatoriedad en las sentencias del juicio de amparo que dicten los Jueces y Tribunales de Amparo en la aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos ; la obligatoriedad y efecto vinculante de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los Jueces y Tribunales de Amparo; la aplicación en las sentencias de amparo de la Ley General de Víctimas: El Derecho a la Verdad; el Deber de Investigar; la <reparación integral> a la violación de los derechos humanos; el derecho a la <justa indemnización> y demás medidas de no repetición establecidas en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y en la Ley General

de Víctimas. El carácter de víctimas de los familiares y personas cercanas a la persona fallecida, desaparecida o violentada en sus derechos humanos.

• **AMPARO EN REVISIÓN [REDACTED] DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO JUDICIAL.**

Dice la ejecutoria:

"...La Ley General de Víctimas, que tiene por objeto velar por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral, siendo el objeto de dicha ley reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de las violaciones a derechos humanos.

En el entendido que se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño a menoscabo económico, físico, mental, emocional a en general cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito a violación a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

Los preceptos anteriores panen de relieve el marco legal de protección para los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en donde en el ámbito interno, se ha entendido que el interés superior del niño es un principio que está implícito en la regulación constitucional y en la Ley de los Derechos de las niñas.

Este principio es reconocido expresamente en la Constitución Federal en el artículo 4º Constitucional, en La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en el ámbito internacional en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Sobre el tópico en cuestión la expresión interés superior del niño implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todas las órdenes relativos a la vida del niño.

/.../

DÉCIMO CUARTO. Efectos de la concesión del amparo. *En términos de los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se concede a ..., por sus propios derechos y en representación de su menor hijo... el amparo y protección de la Justicia Federal, acorde con la legislación de la materia los efectos de la concesión del amparo son, cuando el acta reclamado sea de carácter positivo restituir al quejoso en el pleno goce de su derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implica una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.*

En esas condiciones, es de destacarse que cuando el padre del menor presentó la queja por acoso escolar ante las autoridades educativas fue en noviembre de dos mil nueve, el menor ..., contaba con doce años y cursaba el sexto grado de primaria, mientras que cuando presentó la demanda de amparo, el menor contaba con quince años ocho meses, por tanto, ya no podría restituirse en el goce de su derecho violado, sin embargo, puede determinarse una indemnización compensatoria por el daño sufrido por el menor, acorde con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 63.1, Ley General de Víctimas, artículos 1,2, fracción I y II, 7 fracciones II y VII, 26 y 27, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1º y 57, fracción I, 75, fracción I y 76, fracción I de la Ley General de Educación, preceptos que dicen:

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"Artículo 63.-

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho a libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada."

Ley General de Víctimas.

"Artículo 1. La presente Ley general es de orden pública, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona.

(REFORMADO, D.O.F. 3 DE MAYO DE 2013)

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.

(REFORMADO, D.O.F. 3 DE MAYO DE 2013)

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido a la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.

Artículo 2. El objeto de esta Ley es:

(REFORMADA, D.O.F. 3 DE MAYO DE 2013)

I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;

[...]

plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

(REFORMADO, D.O.F. 3 DE MAYO DE 2013)

Artículo 27. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá:

I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos;

II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;

III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas;

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir;

VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, a cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.

Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectadas y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados."

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE AGOSTO DE 2001)

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

(REFORMADO, D.O.F. 4 DE DICIEMBRE DE 2006)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

Ley General de Educación

"Artículo 57.- Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:

(REFORMADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013)

I.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

[...]

Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I.- Incumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo 57;

[...]

Artículo 76.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con:

I.- Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica y en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia, o

[...]"

En el orden internacional la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *Radilla Pacheco Vs Estados Unidos Mexicanos*, en la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil nueve, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), estableció:

"327. Es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente[313]. Esa obligación se regula por el Derecho Internacional[314]. En sus decisiones al respecto, la Corte se ha basado en el artículo 63.1 de la Convención Americana. En el presente capítulo, el Tribunal examinará las pretensiones que, en la materia, señalaron la Comisión Interamericana y los representantes con el objeto de disponer las medidas tendientes a reparar los daños ocasionados a las víctimas.

C5. Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional

351. Los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso a través del jefe de Estado. Al respecto, el Estado indicó que [e]n consulta con los familiares de la víctima, realizaría un acto público de reconocimiento de [...] responsabilidad en relación con las violaciones que determine [la Corte]. Asimismo, indicó que se ofrecería una disculpa a los familiares de la víctima."

De los preceptos anteriores se puede inferir que cuando resuelva que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

Es decir, se garantiza la restitución integral de los derechos del menor afectado, que comprende la reparación integral consistente en las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido a la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.

La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos.

La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos.

La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos.

En el entendido de que una víctima no solamente comprende en materia penal y derivada de una conducta delictuosa, sino que acorde con la Ley General de Víctimas, comprende reconocer y garantizar no solamente el derecho de las víctimas de un delito, sino también cualquier violación a los derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ello, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos.

Es aplicable al caso, la tesis aislada P. LXVII/2010, con número de registro 163164, que al respecto sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Constitucional, página 28, que dice:

"DERECHOS HUMANOS. SU VIOLACIÓN GENERA UN DEBER DE REPARACIÓN ADECUADA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA O DE SUS FAMILIARES, A CARGO DE LOS PODERES PÚBLICOS COMPETENTES. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares, tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido, la cual debe concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición, mediante los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen previsto constitucionalmente como de los instrumentos internacionales ratificados por México y de los criterios de organismos internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido de que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental obtener una reparación proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrida."

En términos de la Ley General de Educación, los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:

Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Las infracciones se sancionarán, entre otras, con multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica y en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia.

Por tanto, para efectos de la reparación del daño, se deben dar los lineamientos a la autoridad responsable que sirvan de base para vincularla con la Institución Educativa ahora tercera perjudicada sobre la forma en que deberá cumplir.

Es preciso destacar que el daño ocasionado al menor es derivado de la desatención en el cumplimiento de la normatividad aplicable que debe cumplir la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, para vigilar la educación de los menores y por ese incumplimiento, es que se debe de emitir una compensación indemnizatoria.

En razón de que, no se está en condiciones de restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados, al transgredirse en perjuicio del menor el derecho fundamental a la dignidad y a la educación, toda vez que el instituto permitió y no corrigió en los otros menores que propiciaron la agresión, y la conducta crítica de rechazo causando un daño psicológico al menor, el que sin duda debe ser reparado, así como la conducta del colegio de excluir al menor de la escuela de manera unilateral que no fue corregida por la Secretaría de Educación.

En esa tesitura el efecto del amparo es para que:

"1. Se deje insubsistente la resolución de veinte de mayo de dos mil trece, emitida por el Secretario de Educación del Estado de Nuevo León y se emita una nueva resolución, que sustituya a la anterior en donde acorde a los lineamientos establecidos en esta ejecutoria determine sancionar al colegio particular ..., por las conductas consistentes en haber actuado con negligencia y descuido en la queja que presentó el padre del menor por acoso escolar de que era objeto su menor hijo por alumnos del plantel educativo, en forma reiterada, consistente en maltrato psicológico, verbal y físico al dejarle de hablar, siendo objeto de burlas, y segregado, por tanto, no atendió adecuadamente la queja administrativa dando una solución al problema como se destacan en esta ejecutoria, debiendo considerar dicha autoridad que el grado de responsabilidad en que incurrió el colegio particular, fue sumamente grave, por las consecuencias generadas, toda vez efectivamente hubo una conducta de maltrato en perjuicio del menor por parte de sus compañeros y de la institución educativa que no fue corregida, que transgredió el derecho fundamental de no discriminación, la dignidad del menor y el

derecho a la educación, por no inscribir, al menor al siguiente ciclo escolar; y como consecuencia, imponga las sanciones siguientes:

a) Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 76, fracción I, de la Ley General de Educación, que establece una multa equivalente a cinco mil veces el salario mínima general diario vigente en el área geográfico, le imponga a la institución educativa, la sanción económica que le corresponda, partiendo de la base que su conducta debe ser calificada como grave.

b) Que las autoridades responsables de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, impongan al colegio particular ..., a favor del menor quejoso una medida de reparación que brinde una atención psicológico adecuada por personal e instituciones estatales especializadas en la atención de víctimas de acoso escolar de hechos como los ocurridos en el presente caso; siempre y cuando los padres del menor y éste, manifiesten su conformidad para recibir dicha atención, partiendo de la base que su conducta debe ser calificada como grave, lo anterior con fundamento en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1° y 27 de la Ley General de Víctimas.

c) Que las autoridades responsables de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, impongan al colegio particular ..., a favor del menor, una indemnización compensatoria por daño material ocasionado. Es decir, por los gastos relacionados con la asistencia psicológica que pudo haber recibido o esté recibiendo, partiendo de la base que su conducta debe ser calificada como grave, lo anterior con fundamento en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1° y 27 de la Ley General de Víctimas.

d) Que las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, impongan al colegio particular ..., a favor del menor por el daño moral que sufrió por ser víctima de maltrato psicológico y discriminación, una indemnización compensatoria que repare el daño, sufrimiento y las aflicciones que causaron la vulneración a los derechos fundamentales del impetrante del amparo, partiendo de la base que su conducta debe ser calificada como grave, lo anterior con fundamento en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1° y 27 de la Ley General de Víctimas.

La cuantía de reparación por el daño material y moral, se deberá establecer en un incidente de ejecución que las autoridades de Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, deberán abrir y verificar su cumplimiento. En la inteligencia de que el juez de Distrito vigilará su debido cumplimiento.

e) Que las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, obliguen al Colegio particular ..., llevar a cabo cursos de capacitación para prevenir y eliminar cualquier forma de violencia escolar para prevenir y erradicar la discriminación y la violación a los derechos humanos, para los maestros, alumnos y padres de familia de la institución académica, en la inteligencia de que las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, debe vigilar, controlar y dará seguimiento a que se cumpla con esta medida. Lo anterior con fundamento en el artículo 27 de la Ley General de Víctimas.

2. Que las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, y el colegio particular en los casos subsecuentes de acoso escolar por violación al derecho fundamental a la no discriminación y a la dignidad del menor, como en la especie, ajusten su conducta a los protocolos de actuación que se encuentran establecidos, tanto en las normas federales como locales y de carácter internacional, para proteger el interés superior del menor y evitar que casos como el que ahora se resuelve se vuelvan a repetir. Lo anterior con fundamento en el artículo 27 de la Ley General de Víctimas.

3. Que la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León le imponga al colegio particular la obligación de llevar un octo público en la propia institución de reconocimiento de responsabilidad y

se ofrezca una disculpa pública al menor y a sus padres por los daños irreparables causados; siempre y cuando los padres del menor y éste se manifiesten de acuerdo. Es importante establecer que dicha disculpa pública, debe llevarse en el colegio, dignificando a las personas ofendidas y resaltando los principios de protección que constitucionalmente debe cumplirse conforme a la Ley General de Educación, la disculpa debe hacerse en el plantel escolar, porque fue en ese lugar donde se generó la conducta de maltrato escolar, además partiendo de la base de que es un problema de política pública, y constituye obligación hacer conciencia tanto en los profesores como en alumnos y en los padres de familia, de las consecuencias, en ocasiones irreparables, que sufren los menores que son víctimas de maltrato a fin de que no se vuelvan a repetir. Al acto público deberá convocarse a las víctimas y estar presente las autoridades, con la precisión de que la convocatoria deberá hacerse con el tiempo suficiente entre la notificación y la ceremonia que, además, será solemne. En la comunicación la autoridad deberá correr traslado del programa y del contenido exacto a los quejasos a fin de que tengan la certeza del propósito y no puedan ser objeto de una ofensa mayor ni de justificación a lo que ya se determinó. Lo anterior con fundamenta en el artículo 27 de la Ley General de Víctimas....”

• **AMPARO EN REVISIÓN [REDACTED] DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO JUDICIAL.**

Dice la ejecutoria:

“...NOVENO. Establecido lo anterior, este tribunal colegiado se estima competente para resolver el presente asunto.

En la elección de la norma que servirá para resolver la cuestión planteada, este Tribunal Colegiado atiende que los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, cuando sea más favorable a la persona, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado, como se desprende de la jurisprudencia 21/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 204, Libro 5, Abril de 2014, Toma I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

“JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichas criterios se determino el contenido de los derechos humanos establecidas en ese tratada. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio *pro persona* obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específica debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse lo

jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos.”

En relación con el tema en cuestión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas y ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas por el sufrimiento causado por las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales.

Lo anterior, entre otros, en los siguientes casos contenciosos: *Blake vs. Guatemala*. Sentencia de 24 de enero de 1998, párrafos 114, 115 y 116; *Bámaca Velásquez vs. Guatemala*. Sentencia de 25 de noviembre de 2000, párrafo 160; *Juan Humberto Sánchez vs. Honduras*. Sentencia de 7 de junio de 2003, párrafos 101 y 102 ; 19 *Comerciantes vs. Colombia*. Sentencia de 5 de julio de 2004, párrafo 210; *Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador*. Sentencia de 1 de marzo de 2005, párrafos 113 a 115; *Gómez Palomino vs. Perú*. Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párrafo 60; *López Álvarez vs. Honduras*. Sentencia de 1 de febrero de 2006, párrafo 119; *Baldeón García vs. Perú*. Sentencia de 5 de abril de 2006, párrafo 128; *Ximenes López vs. Brasil*. Sentencia de 4 de julio de 2006, párrafo 156; *Servellón García y otros vs. Honduras*. Sentencia de 21 de septiembre de 2006, párrafo 128; *Goiburú y otros vs. Paraguay*. Sentencia de 22 de septiembre de 2006, párrafo 96; *Vargas Areco vs. Paraguay*. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafo 83; *Bueno Alves vs. Argentina*. Sentencia de 11 de mayo de 2007, página 102; y *Cantaral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú*. Sentencia de 10 de julio de 2007, párrafo 112.

Resulta importante señalar que en la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil, relativa al caso *Bámaca Velásquez vs. Guatemala* (párrafos 162 y 163) la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó que la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos también ha aceptado que **cuando se violan derechos fundamentales de una persona humana, tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad física, las personas más cercanas a la víctima también pueden ser consideradas como víctimas**. También destacó que la Corte Europea de Derechos Humanos desarrolló aún más el concepto, resaltando que entre los extremos a ser considerados se encuentran también los siguientes: la proximidad del vínculo familiar, las circunstancias particulares de la relación con la víctima, el grado en el cual el familiar fue testigo de los eventos relacionados con la desaparición, la forma en que el familiar se involucra respecto a los intentos de obtener información sobre la desaparición de la víctima y la respuesta ofrecida por el Estado a las gestiones incoadas.

En la diversa sentencia de diecinueve de mayo de dos mil once, relativa al diverso caso *Vera Vera y otros vs. Ecuador*, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en relación al tema relativo a la **atención médica como parte del derecho a la vida e integridad personal de los seres humanos**, en los siguientes términos:

“...39. Este Tribunal ha sostenido que el derecho a la vida es fundamental en la Convención Americana, por cuanto de su salvaguarda depende la realización de los demás derechos. En razón de dicho carácter, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para su pleno goce y ejercicio.

40. Por otra lado, el derecho a la integridad personal es de tal importancia que la Convención Americana lo protege particularmente al establecer, inter alia, la prohibición de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y la imposibilidad de suspenderlo durante estados de emergencia.

41. Los derechos a la vida y a la integridad personal no sólo implican que el Estado debe respetarlos (obligación negativa), sino que, además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlos (obligación positiva), en cumplimiento de su deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana.

42. El Tribunal ha señalado que de las obligaciones generales de respetar y garantizar las derechos que establece el artículo 1.1 de la Convención Americana derivan deberes especiales determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre. En tal sentido, esta Corte ha indicado que, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Como responsable de los establecimientos de detención, el Estado se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención. En este sentido, los Estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten la dignidad del ser humano.

43. Las derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana. En este sentido, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar física, mental y social, e indica que la salud es un bien público. Así, esta Corte ha establecido que el Estado tiene el deber, como garante de la salud de las personas bajo su custodia, de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento médicos adecuados cuando así se requiera.

44. Este Tribunal ha señalado que la falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a la condición de ser humano en el sentido del artículo 5 de la Convención Americana. Así, la falta de atención médica adecuada a una persona que se encuentra privada de la libertad y bajo custodia del Estado podría considerarse violatoria del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en particular, tales como su estado de salud o el tipo de dolencia que padece, el lapso transcurrido sin atención, sus efectos físicos y mentales acumulativos y, en algunos casos, el sexo y la edad de la misma, entre otros...”

Las consideraciones destacadas deben observarse por este órgano jurisdiccional, en razón de que los jueces mexicanos están vinculados a observar la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando sea más favorable a la persona, lo que se advierte de la tesis XIII/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 650, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

“CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. EFECTOS DE SUS SENTENCIAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. El Estado Mexicano se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 16 de diciembre de 1998, mediante declaración unilateral de voluntad que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1999. En ese sentido, los artículos 133 y 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen la vigencia de los tratados internacionales en nuestro ordenamiento jurídico interno y establecen la obligación de las autoridades nacionales de aplicar las derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales vigentes en nuestro país. Por lo anterior, la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generan como una consecuencia ineludible que las sentencias emitidas por dicho tribunal internacional, en aquellos casos en los cuales México haya sido parte en el juicio, resulten obligatorias para el Estado mexicano, incluidos todos los jueces y tribunales que lleven a cabo funciones materialmente jurisdiccionales. Esta obligatoriedad alcanza no sólo a los puntos

resolutivos de las sentencias en comento, sino a todos los criterios interpretativos contenidos en las mismas."

En el caso, como ya se indicó, la quejosa reclamó del Hospital "... la incomunicación y malos tratos que ocasionaron lesiones durante el tiempo en que convaleció en dicho centro médico, cuando la intención de toda persona que acude a los centros hospitalarios, evidentemente, es sanar de sus padecimientos o al menos, tener una mejor calidad de vida a través de una atención médica profesional. "

En ese contexto, este órgano jurisdiccional por las razones expuestas asume jurisdicción a efecto de resolver la cuestión efectivamente planteada y, en este sentido, procede el análisis de los agravios del representante de la quejosa, que tienden a desestimar las causas de improcedencia que aplicó el juez de Distrito.

/.../

DÉCIMO QUINTO. Los conceptos de violación se analizan en forma conjunta con el agravio segundo del escrito de recurso, mismo que se encuentra estrechamente relacionado con el tercero que se declaró fundado.

/.../

Consecuentemente, al advertirse que los argumentos en estudio resultaron **fundados**, y que se transgredió en perjuicio de la agraviada el derecho humano a la salud contenido en los artículos 1 y 4, de la Constitución General de la República, este órgano colegiado como garante de los derechos fundamentales, estima procedente conceder a la paciente quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal.

Empero, como no es posible restituir a la quejosa en el pleno goce de sus garantías transgredidas con motivo de su fallecimiento, el amparo debe tener como propósito resarcir a los familiares que directamente resintieron los actos reclamados ejecutados en perjuicio de la paciente, como lo son la incomunicación de que fue objeto, así como los malos tratos que ocasionaron lesiones.

Por ella, el efecto del amparo debe tener como propósito el resarcimiento económico, en esencia, una indemnización compensatoria por el daño sufrido y acreditado en los presentes autos, lo que comprende la reparación integral consistente en las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.

De tal forma, que para satisfacer los efectos de la reparación de los derechos transgredidos, es necesario establecer las lineamientos bajo los cuales se debe dar cumplimiento a la presente ejecutoria, tanto la autoridad responsable ..., así como la Secretaría de Salud del Estado en su carácter de protectora de ese derecho en términos del artículo 3 de la Constitución Local y 4 de la Constitución Federal, como más adelante se precisa.

Todo lo cual, tiene como propósito resarcir económicamente a los deudos de la quejosa fallecida, así como en su redignificación en su calidad de víctimas, derivado de la desatención en el cumplimiento de la normatividad aplicable que debía observar la responsable Hospital ..., en concreto, la Ley General de Salud y la Ley Estatal de Salud, para vigilar la debida prestación de los servicios de salud a los pacientes internados en los Hospitales Públicos y Privados.

Lo anterior, considerando que los actos reclamados de incomunicación y malos tratos no solo afectaron a la quejosa paciente, sino que trascendieron a su familia, pues directa (incomunicación) e indirectamente (malos tratos), se vieron privados de atender adecuadamente a la paciente y vigilar que se le estuvieran proporcionando los servicios médicos adecuados y, por otro lado, apreciaron el deterioro en la salud de la paciente por las lesiones ocasionadas, sin saber o poder intervenir, tomando en cuenta que el hospital y prestadores del servicio son los que, en teoría, tienen las instalaciones y el personal capacitado para ello. En este contexto, la reparación de los daños en este tipo de asuntos no puede concretarse solamente a

los que sufrió la persona que los recibió, sino que involucro el entorno en el que se desarrollaron, en especial, a las personas más cercanas a la afectada, pues ellos resienten el perjuicio tal vez no en lo físico, pero sí en lo moral y psicológico.

En efecto, la dignidad de la quejoso se afectó por el indebido trato médico que se le brindó el que, debido a su precario estado de salud, tuvo que soportar, pues no tenía la capacidad para manifestar que el inadecuado servicio le estaba ocasionando las lesiones descritas en el dictamen pericial.

Ante ello, la familia de la paciente quejosa sufrió daño moral, que consiste en la lesión de los sentimientos que les ocasionó dolor inmaterial en el aspecto moral y psicológico, que requiere ser redignificado a través de una reparación integral.

Lo anterior, ya que el acto reclamado de incomunicación, no sólo afectó el derecho de la quejosa, sino que trascendió al de los familiares que ocasionalmente no pudieron acceder a la paciente, para constatar su estado de salud, así como ante la imposibilidad de impedir que se le siguiera afectando a la salud de la paciente durante su estadía en el hospital responsable.

Esto, ya que la proximidad del vínculo familiar, tomando en cuenta que debido al estado de salud, la paciente no estaba en aptitud de tomar las decisiones que le beneficiaron, por lo que, sus parientes fueron quienes estuvieron al pendiente de su salud, con la salvedad de que en ocasiones no pudieron acceder a una visita para ello.

Así, al transgredirse la dignidad humana de la paciente que trascendió a la de su familia, a través de la presente ejecutoria se pretende que, dentro de lo posible, se redignifique ese derecho de los familiares, que con motivo de los actos reclamados no les fue respetado ni valorado.

Por lo que, al no respetar el derecho o la salud de la paciente quejosa, el fin del presente amparo tiene un efecto reparador en lo económico y de redignificación de los familiares en su calidad de víctimas, en los términos que más adelante se destacan.

Por lo anterior, tomando en consideración que la responsable Hospital ... tiene la obligación de otorgar a todos los pacientes el derecho humano de nivel más alto posible a la salud, por lo que, la atención médica que brinde debe ser considerada de calidad, dentro de lo cual debe entenderse la debida atención no sólo al paciente si no a los familiares que, como se destacó, también resienten los daños y perjuicios que sufre el convaleciente, a quienes debe otorgarse la debida información y la permisión para estar al pendiente del familiar enfermo, consintiendo que exista una adecuada comunicación o verificación del estado de salud de la paciente, lo que en el caso no ocurrió.

Además, es obligación de la responsable prevenir en la medida de lo posible, que el paciente contraiga infecciones, enfermedades o trastornos relacionados con la atención que recibe y que inclusive, pueden llegar a poner en peligro la vida.

Aspectos que tampoco advirtió la responsable, puesto que del dictamen pericial del profesional designado por el juez de Distrito se aprecia, que durante el internamiento de la paciente en el Hospital ..., se le ocasionaron diversas lesiones a la paciente por negligencia y falta de cuidado del personal que la atendió.

/.../

DÉCIMO SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se concede a la quejosa ... a través de su familia, el amparo y protección de la Justicia Federal.

Bien, acorde con la legislación de la materia los efectos de la concesión del amparo son, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo restituir al quejoso en el pleno goce de su derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implica una omisión, obligar a la autoridad responsable o respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.

En esas condiciones, es de destacarse que cuando el representante de la quejosa (en su carácter de hijo) presentó el juicio de amparo indirecto, aquélla convalecía en el Hospital ..., empero, el siete de febrero del actual, falleció, por tanto, ya no podría restituirse en el goce de su derecho violado, sin embargo, puede determinarse una reparación diversa mediante una indemnización compensatoria por el daño sufrido y acreditado en los presentes autos, acorde con la artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 2 y 27 de la Ley General de Víctimas, artículos 1 y 4 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 1-bis, 2, 135 de la Ley Estatal de Salud del Estado de Nuevo León, preceptos que dicen:

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"Artículo 63.-

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada."

Ley General de Víctimas.

"Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona.

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.

Artículo 2. El objeto de esta Ley es:

I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;

plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

Artículo 27. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá:

I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación

de sus derechos humanos;

II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;

III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas;

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir;

VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.

Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados.”

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

(...)

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

(...).”

Ley Estatal de Salud.

“Artículo 1a.- La presente Ley Reglamenta el derecho a la protección de la salud contenido en el artículo tercero de la Constitución Política del Estado, establece las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud, y las bases para la participación del estado y sus municipios en materia de salubridad general y regula la salubridad local, sus disposiciones son de orden público e interés social.

Artículo 1o bis.- Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Artículo 2o.- La protección a la salud, es el derecho que tienen todos los habitantes del estado de Nuevo León a la procuración de condiciones de salubridad e higiene que les permitan el desarrollo integral de sus capacidades físicas y mentales.

Artículo 135.- Las infracciones no previstas en este capítulo, serán sancionadas con multa equivalente hasta de 500 veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, atendiendo las reglas de calificación que se establecen en el artículo 138 de esta ley."

En el orden internacional la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *Radilla Pacheco Vs Estados Unidos Mexicanos*, en la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil nueve, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), estableció:

"327. Es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente [313]. Esa obligación se regula por el Derecho Internacional [314]. En sus decisiones al respecto, la Corte se ha basado en el artículo 63.1 de la Convención Americana. En el presente capítulo, el Tribunal examinará las pretensiones que, en la materia, señalaron la Comisión Interamericana y los representantes con el objeto de disponer las medidas tendientes a reparar los daños ocasionados a las víctimas.

C5. Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.

351. Los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso a través del jefe de Estado. Al respecto, el Estado indicó que [e]n consulta con los familiares de la víctima, realizaría un acto público de reconocimiento de [...] responsabilidad en relación con las violaciones que determine [la Corte]. Asimismo, indicó que se ofrecería una disculpa a los familiares de la víctima."

De los preceptos anteriores se puede inferir que cuando resuelva que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se dispondrá que se garantice al lesionada en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

Es decir, se garantiza la restitución integral de los derechos del quejoso afectado, (en el caso, de las familiares que resintieron los daños que le fueron infringidos a la paciente con motivo de su convalecencia en el Hospital ...), que comprende la reparación integral consistente en las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.

La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos.

La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos.

La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos.

En el entendido de que una víctima no solamente comprende en materia penal y derivada de una conducta delictuosa, sino que acorde con la Ley General de Víctimas, comprende reconocer y garantizar no solamente el derecho de las víctimas de un delito, sino también cualquier violación a los derechos humanos, en especial el derecho a la salud, asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación

integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos.

En cuanto a que dichos conceptos, en el presente caso deben cubrirse en favor de los familiares de la quejosa, como se mencionó al desestimarse la causa de sobreseimiento relacionada con el fallecimiento de la quejosa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos asuntos ha sostenido que los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas, dado el sufrimiento causado por aquélla, perjuicios que trascienden a la integridad psíquica y moral de los familiares por las violaciones perpetradas contra sus seres queridos.

Casos dentro de los cuales destaca la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil, relativa al caso *Bámaca Velásquez vs. Guatemala* (párrafos 162 y 163) en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos también ha aceptado que cuando se violan derechos fundamentales de una persona humana, tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad física, las personas más cercanas a la víctima también pueden ser consideradas como víctimas. También destacó que la Corte Europea de Derechos Humanos desarrolló aún más el concepto, resaltando que entre los extremos a ser considerados se encuentran también las siguientes: la proximidad del vínculo familiar, las circunstancias particulares de la relación con la víctima, el grado en el cual el familiar fue testigo de los eventos relacionados con la desaparición, la forma en que el familiar se involucró respecto a los intentos de obtener información sobre la desaparición de la víctima y la respuesta ofrecida por el Estado a las gestiones incaadas.

Mientras que, en la diversa sentencia de diecinueve de mayo de dos mil once, relativa al diverso caso *Vera Vera y otra vs. Ecuador*, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en relación al tema relativo a la atención médica como parte del derecho a la vida e integridad personal de los seres humanos, en los siguientes términos:

"...

39. Este Tribunal ha sostenido que el derecho a la vida es fundamental en la Convención Americana, por cuanto de su salvaguarda depende la realización de los demás derechos. En razón de dicho carácter, las Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para su pleno goce y ejercicio.
40. Por otro lado, el derecho a la integridad personal es de tal importancia que la Convención Americana lo protege particularmente al establecer, inter alia, la prohibición de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y la imposibilidad de suspenderlo durante estados de emergencia.
41. Los derechos a la vida y a la integridad personal no sólo implican que el Estado debe respetarlos (obligación negativa), sino que, además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlos (obligación positiva), en cumplimiento de su deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana.
42. El Tribunal ha señalado que de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos que establece el artículo 1.1 de la Convención Americana derivan deberes especiales determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre. En tal sentido, ésta Corte ha indicado que, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Como responsable de los establecimientos de detención, el Estado se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención. En este sentido, los Estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten la dignidad del ser humano.

43. Los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención a la salud humana. En este sentido, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, e indica que la salud es un bien público. Así, esta Corte ha establecido que el Estado tiene el deber, como garante de la salud de las personas bajo su custodia, de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento médicos adecuados cuando así se requiera.
44. Este Tribunal ha señalado que la falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a la condición de ser humano en el sentido del artículo 5 de la Convención Americana. Así, la falta de atención médica adecuada a una persona que se encuentra privada de la libertad y bajo custodia del Estado podría considerarse violatoria del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención dependiendo de las circunstancias concretas de la persona en particular, tales como su estado de salud o el tipo de dolencia que padece, el lapso transcurrido sin atención, sus efectos físicos y mentales acumulativos y, en algunos casos, el sexo y la edad de la misma, entre otros..."

Al respecto, es aplicable al caso la tesis aislado P. LXVII/2010, con número de registro 163164, que el respecto sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Constitucional, página 28, que dice:

"DERECHOS HUMANOS. SU VIOLACIÓN GENERA UN DEBER DE REPARACIÓN ADECUADA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA O DE SUS FAMILIARES, A CARGO DE LOS PODERES PÚBLICOS COMPETENTES. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares, tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido, la cual debe concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición, mediante los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen previsto constitucionalmente como de los instrumentos internacionales ratificados por México y de los criterios de organismos internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido de que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental obtener una reparación proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido."

Por tanto, para efectos de la reparación de los derechos violados en el caso, se deben dar los lineamientos a la autoridad responsable que sirvan de base para vincularla con la Secretaría de Salud del Estado sobre la forma en que deberá cumplirse la presente ejecutoria.

Sobre este punto, es decir, en relación a vincular a la Secretaría de Salud del Estado como autoridad que sin ser emplazada al juicio de amparo tiene la obligación de cumplir la ejecutoria de amparo, cabe decir, que esa obligación deriva del contenido del artículo 197 de la Ley de Amparo que dice:

"Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo."

En este sentido, al ser la Secretaría de Salud del Estado, una autoridad sanitaria en términos del artículo 5 fracción II, de la Ley Estatal de Salud, le corresponde vigilar el derecho a la protección de la salud contenido en el artículo tercero de la Constitución Política del Estado y 4 de la Constitución Federal.

En razón de lo cual, tiene la obligación de verificar la debida prestación de los servicios de salud que otorguen tanto las instituciones públicas como las privadas, como lo resulta ser el Hospital ..., en términos del numeral 20 de la mencionada ley.

En este sentido, es preciso destacar que el daño ocasionado a lo paciente quejosa es derivada de la desatención en el cumplimiento de la normatividad aplicable que debía observar la responsable Hospital ..., en concreto, la Ley General de Salud y la Ley Estatal de Salud, para vigilar la debida prestación de los servicios de salud a los pacientes internados en los Hospitales Públicos y Privados y por ese incumplimiento, es que se debe de emitir una compensación indemnizatoria.

En razón de que, no se está en condiciones de restituir a la quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, al haber fallecido, no obstante, se encuentran debidamente acreditados en autos del juicio de garantías los actos reclamados de incomunicación y de malos tratos que ocasionaron lesiones a la paciente, con lo cual se transgredió en perjuicio de ella su derecho fundamental a la dignidad humana y salud, toda vez que el hospital responsable impidió en diversas ocasiones que los familiares estuvieran al pendiente de la salud de la quejosa, máxime, cuando el personal médico al haber actuado con descuido y negligencia en sus funciones, ocasionó lesiones a la quejosa que mermaron su estado de salud, que si bien, no puede afirmarse que ellas ocasionaron la defunción de la paciente, también es verdad que, sí afectaron su salud.

Situación que se justificó con el dictamen pericial del perito designado por el juez de Distrito, quien sostuvo que durante el internamiento de la paciente en el Hospital ..., a la paciente quejosa se le ocasionaron diversas lesiones por negligencia y falta de cuidado del personal que la atendió.

Sosteniendo que:

"La posible recuperación de sus alteraciones neurológicas, renales y respiratorias será lenta y pasara mucho tiempo. Desde el punto de vista renal, deberá continuar en el programa de hemodiálisis, ya que la toxicidad de los antibióticos utilizados para salvar su vida fue muy alta y pudieron no recuperarse su función renal."

Por otro lado, en la ampliación del dictamen pericial señaló:

"... a la paciente ..., durante su estancia en el Hospital ..., se le ocasionó: daño renal irreversible, infecciones intrahospitalarias, una cicatriz visible y perpetua en el dorso de la nariz. "

Esto es, el personal médico que atendió a la paciente no permitió que los familiares estuvieran al pendiente de la paciente, no obstante su delicado estado de salud y, por otro lado, no llevó a cabo una adecuada atención médica y por el contrario, descuidó la salud de la paciente por el inadecuado tratamiento clínico, lo que ocasionó lesiones a la paciente, ocasionando que los familiares resintieran daños morales por los sentimientos de angustia dada la preocupación por no conocer su estado de salud, mayormente cuando en el hospital responsable le fueron ocasionadas lesiones a la paciente por malos tratos y negligencia.

En este sentido, la reparación del daño en presente asunto no puede concretarse solamente a los que sufrió la persona que los recibió, sino que involucra el entorno en el que se desarrollaron, en especial, a las personas más cercanas a la afectada, pues ellos también resultan afectados ante el sufrimiento de su paciente.

Por ello, se estima que la familia de la paciente quejosa sufrió daño moral que consiste en la lesión de los sentimientos que ocasionó dolor inmaterial y, en su caso, sufrimiento físico, por el desgaste anímico que les ocasionó ver el estado de salud del familiar, lo que derivó del descuido y de la negligencia médica.

Cierto, el acto reclamado de incomunicación no sólo afectó el derecho de la quejosa, sino que trascendió al derecho de los familiares que no pudieron acceder a la visita de la paciente para constatar su estado de salud, quién debida a su estado de salud no podía valerse por sí misma, sino que requería que sus familiares observaran su evolución o detrimento en su salud, para gestionar una adecuada o mejor atención médica, pues no hay que olvidar las lesiones que aquella sufrió durante su convalecencia en el hospital responsable.

Estos daños inmateriales y psicológicos atienden a la proximidad del vínculo familiar, tomando en cuenta que debido al estado de salud, la paciente no estaba en aptitud de tomar las decisiones que le beneficiaran, por lo que, sus parientes fueron quienes estuvieron al pendiente de su salud, con la salvedad de que en ocasiones no pudieron acceder a una visita para ello.

Además, para efecto de la reparación del daño, también se considera la circunstancia particular de la quejosa, ya que sus familiares tuvieron la necesidad de promover el juicio de amparo ante la incomunicación y malos tratos que recibió la paciente por negligencia y descuido del personal tratante. Incluso, se toma en cuenta que los familiares fueron testigos de los eventos relacionados con la salud de la paciente quejosa y, la forma en que ellos se involucraron para obtener información sobre su estado clínico y el estado de salud propiciado por la inadecuada atención médica.

En esa tesitura el efecto del amparo es para que:

"1. El Secretario de Salud de Estado emita una resolución en la que, acorde a los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, determine sancionar al Hospital ..., por las conductas consistentes en los actos de incomunicación y malos tratos que ocasionaron lesiones destacados por haber actuado con negligencia y descuido en el tratamiento de la paciente quejosa, con lo que transgredió el derecho fundamental de salud, no discriminación y dignidad; y como consecuencia, imponga las sanciones siguientes:

a) Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley Estatal de Salud en el Estado, que establece una multa equivalente a quinientas veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica, le imponga a la institución hospitalaria, la sanción económica que le corresponda, partiendo de la base que su conducta debe ser calificada como grave.

b) Imponga a las autoridades responsables del Hospital ..., a favor de los familiares de la paciente quejosa, una medida de reparación que brinde una atención psicológica adecuada por personal e instituciones estatales especializadas en la atención de víctimas con motivo de los hechos analizados en el presente asunto; siempre y cuando los integrantes, en lo individual, manifiesten su conformidad para recibir dicha atención, partiendo de la base que su conducta debe ser calificada como grave, lo anterior con fundamento en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1° y 27 de la Ley General de Víctimas.

c) Determine a cargo de las autoridades responsables del Hospital ..., a favor de los familiares de la paciente, una indemnización compensatoria por daño material ocasionado. Es decir, por los gastos relacionados con la asistencia psicológica que pudieron haber recibido o estén recibiendo, partiendo de la base que su conducta debe ser calificada como grave, lo anterior con fundamento en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1° y 27 de la Ley General de Víctimas.

d) Determine a cargo del Hospital ..., en favor de los familiares de la quejosa, por el daño moral que sufrió por ser víctima de incomunicación y maltrato que ocasionaron lesiones, una indemnización compensatoria que repare el daño, sufrimiento y las aflicciones que causaron la vulneración a los derechos fundamentales de la paciente, partiendo de la base que su conducta debe ser calificada como grave, lo anterior con fundamento en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1° y 27 de la Ley General de Víctimas.

La cuantía de reparación por el daño material y moral, se deberá establecer en un incidente de ejecución que las autoridades de la Secretaría de Salud en el Estado de Nuevo León, deberán abrir y verificar su cumplimiento. En la inteligencia de que el juez de Distrito vigilará su debido cumplimiento.

e) Verificar que las autoridades responsables del Hospital ..., lleven a cabo cursos de capacitación con su personal, para prevenir y eliminar actos como los reclamados, tanto respecto de los pacientes como de sus familiares, en la inteligencia de que las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, deben vigilar, controlar y dar seguimiento para que se cumpla con esta medida. Lo anterior con fundamento en el artículo 27 de la Ley General de Víctimas.

2. Que las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León y el hospital particular responsable, en los casos subsecuentes de cuidado médico a los pacientes y atención de sus familiares, como en la especie, ajusten su conducta a los protocolos de actuación que se encuentran establecidos,

tanto en las normas federales como locales y de carácter internacional, para proteger el derecho a la salud y evitar que casos como el que ahora se resuelve se repitan. Lo anterior con fundamento en el artículo 27 de la Ley General de Víctimas.

3. Que la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León le imponga al hospital particular la obligación de realizar un acto público en la propia institución de reconocimiento de responsabilidad y para ofrecer una disculpa a los familiares de la quejosa, por los daños irreparables causados con motivo de la incomunicación y maltrato que sufrió la paciente; siempre y cuando los familiares manifiesten estar de acuerdo con ello. Es importante establecer que dicha disculpa pública, debe llevarse a cabo en el propio hospital, dignificando a las personas ofendidas y resaltando los principios de protección que constitucionalmente deben cumplirse conforme a la Ley Estatal de Salud, la disculpa debe hacerse en las instalaciones del nosocomio, porque fue en ese lugar donde se generó la conducta de incomunicación y maltrato, además partiendo de la base de que es un problema de política pública, y constituye obligación hacer conciencia tanto en el personal auxiliar como en los profesionistas de la medicina, de las consecuencias, en ocasiones irreparables, que sufren los pacientes que son víctimas de maltrato a fin de que no se repitan.

Al acto relativo deberá convocarse a los familiares y estar presente las autoridades de la Secretaría de Salud y del Hospital ..., con la precisión de que la convocatoria deberá hacerse con el tiempo suficiente entre la notificación y la ceremonia que, además, será solemne. En la comunicación la autoridad deberá correr traslado del programa y del contenido exacto a los familiares de la paciente a fin de que tengan la certeza del propósito y no puedan ser objeto de una ofensa mayor ni de justificación a lo que ya se determinó. Lo anterior con fundamento en el artículo 27 de la Ley General de Víctimas...”

• **AMPARO EN REVISIÓN** **DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMONOVENO**
CIRCUITO JUDICIAL

Dice la ejecutoria:

“... 1036. Cabe precisar que el hecho de que una investigación cumpla esas características, guarda estrecha relación con el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad.

1037. Al respecto, en la sentencia de 23 de noviembre de 2009, dictada en el Caso Radilla Pacheco contra México, se destacó precisamente que las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, y el Estado tiene la obligación de llevar a cabo una investigación efectiva para arribar a la misma.

1038. Para mayor claridad, se reproduce un fragmento de dicho fallo, a continuación:

“...167. Asimismo, el Tribunal ha señalado que ante hechos de desaparición forzada de personas, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la integridad personal de los familiares también por la vía de investigaciones efectivas. Más aún, la ausencia de recursos efectivos ha sido considerada por la Corte como fuente de sufrimiento y angustia adicionales para las víctimas y sus familiares. En el presente caso han sido constatadas ante la Corte todas las gestiones realizadas por familiares del señor Radilla Pacheco, con ocasión de su desaparición, ante distintas instituciones y dependencias estatales para determinar su paradero, así como para impulsar las investigaciones correspondientes (infra párrs. 183 a 189, y 260 a 264).

[...]

180. Adicionalmente, la Corte ha considerado que, en el marco de los artículos 1.1, 8 y 25 de la Convención Americana, los familiares de las víctimas tienen el derecho, y los Estados la obligación, a que los hechos sean efectivamente investigados por las autoridades estatales y, en ese sentido, a conocer la verdad de lo sucedido. De manera particular, la Corte ha establecido el contenido del derecho a conocer

la verdad en su jurisprudencia en casos de desaparición forzada de personas. En tal sentido, ha confirmado la existencia de un [d]erecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos. Además, correlativamente, en este tipo de casos se entiende que los familiares de la persona desaparecida son víctimas de los hechos constitutivos de la desaparición forzada, lo que les confiere el derecho a que los hechos sean investigados y que los responsables sean procesados y, en su caso, sancionados. Así, la Corte recuerda que el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención. En consecuencia, en este caso no se pronunciará respecto del alegato de la supuesta violación del artículo 13 de la Convención Americana formulado por los representantes (*supra* párr. 5). (Lo resaltado no es de origen)."

1039. Ahora, la investigación debe estar orientada a la obtención de la verdad.

1040. La importancia del derecho a la verdad se ha reiterado en criterios recientes, como el contenido en la sentencia de 31 de agosto de 2017, al dictar la sentencia del Caso Vereda La Esperanza contra Colombia.

1041. Enseguida se reproduce la parte conducente de dicho fallo:

"...220. Respecto al derecho a la verdad, este Tribunal recuerda que toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad. En consecuencia, los familiares de las víctimas y la sociedad deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones. Si bien el derecho a conocer la verdad se ha enmarcado fundamentalmente en el derecho de acceso a la justicia, lo cierto es que este derecho a la verdad tiene autonomía ya que aquel tiene una naturaleza amplia y su vulneración puede afectar distintos derechos contenidos en la Convención Americana, dependiendo del contexto y circunstancias particulares del caso. La Corte ha considerado en su jurisprudencia, en particular en casos de desaparición forzada, que el derecho a conocer el paradero de las víctimas desaparecidas constituye un componente esencial del derecho a conocer la verdad. Frente a la alegada negativa del Estado para desarrollar una investigación eficaz, la Corte se remite a lo ya dicho en esta sentencia con relación a este punto, y resalta que con respecto a la búsqueda de los involucrados se pudo constatar que desde 1996 se han llevado a cabo diligencias de exhumaciones en cementerios municipales, entrevistas, inspecciones judiciales y búsqueda en la ribera de un río de la zona.

221. Si bien este Tribunal valora positivamente todas las acciones y los esfuerzos que se han llevado a cabo por el Estado colombiano para dar con el paradero de las víctimas desaparecidas, lo cierto es que en el presente caso han transcurrido más de 20 años sin que se conozca actualmente el paradero de las mismas. Como ha reconocido este Tribunal en su jurisprudencia sobre desaparición forzada de personas, uno de los componentes esenciales del derecho a conocer la verdad es el derecho de los familiares a conocer el paradero de las víctimas desaparecidas; así, mientras no se establezca el paradero de las víctimas del presente caso, el Estado colombiano es responsable por la violación del derecho a la verdad, toda vez que los familiares de las víctimas no pueden ver satisfecho este derecho mientras subsista la incertidumbre del paradero de las mismas. La incertidumbre sobre el paradero de los seres queridos es una de las principales fuentes de sufrimientos psíquico y moral de los familiares de las víctimas desaparecidas."

1042. Como se ve, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró la importancia del derecho de todas las personas, en especial, los familiares de las víctimas a conocer la verdad; y que en casos de desaparición forzada de personas, uno de los componentes esenciales de ese derecho, lo constituye el conocer el paradero de las víctimas desaparecidas...

- ... **1242.** ► Por otra parte, una mención especial merece la situación por la que están atravesando las víctimas.
- 1243.** Así es, tal y como lo apuntó el GIEI, en su Segundo Informe de Avances y Nuevas Conclusiones Sobre la Investigación, Búsqueda y Atención a las Víctimas, los proyectos de vida de los familiares, y en especial de los padres de los estudiantes desaparecidos, han sido transformados, pues desde entonces, han dedicado prácticamente todo su tiempo y esfuerzos en una incansable búsqueda de sus hijos.
- 1244.** Ahora, en el caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya ha tomado conocimiento del caso, tan es así que en su momento dictó medidas cautelares.
- 1245.** Dados los defectos que se suscitaron en la investigación, se considera que de no arribarse a una solución amistosa, se prosiga a una fase contenciosa ante la Corte Interamericana de Derechos humanos, y eventualmente, a una condena.
- 1246.** No obstante, con independencia de lo anterior, se estima prudente tomar en cuenta los parámetros interamericanos, y al efecto, por ejemplo, se tiene el **Caso Trujillo Oroza contra Bolivia**, en el que, mediante resolución de 26 de enero de 2000, la Corte Interamericana de Derechos humanos aceptó la admisión de los hechos y declaración de responsabilidad (sobre desaparición forzada de personas) de ese país.
- 1247.** Es decir, que el allanamiento total, no libró a dicho Estado de la reparación pecuniaria, pues se estableció que Bolivia debía emitir diversos pagos por conceptos de daño material e inmaterial, que resultaron en más de \$100,000.00 (cien mil dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de América) para la familiar, en su condición de derechohabiente de la persona desaparecida.
- 1248.** Por lo que tomando en consideración las necesidades que están padeciendo los familiares de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos, en cuya afectación habrían intervenido diversas autoridades; sería un buen gesto del Estado Mexicano, anticipar una indemnización parcial a favor de los familiares de los estudiantes desaparecidos.
- 1249.** Así, tomando en cuenta los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se pone a su atenta consideración que una indemnización pecuniaria parcial, podría ser del orden de los \$500,000.00 (Quinientas mil pesos 00/100 moneda nacional), a cada una de las familias de los estudiantes desaparecidas.
- 1250.** En el entendido de que lo anterior implicaría únicamente un adelanto parcial, para que las víctimas puedan afrontar las dificultades económicas más apremiantes, derivado de la situación a que se han venido enfrentado desde la desaparición de sus familiares; e incluso, para afrontar los gastos que el propio litigio conlleva.
- 1251.** Todo ello se considerará por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el supuesto de que el asunto se sometiera a su jurisdicción, y el Estado mexicano resultara condenado, como en el **Caso Trujillo Oroza contra Bolivia**.
- 1252.** Además, el Estado no quedaría liberado de su deber de seguir enfocando todos los esfuerzos institucionales hasta encontrar a los estudiantes desaparecidos, lograr el total esclarecimiento de los hechos, el procesamiento y sanción de todos los responsables, y desde luego, la integral reparación de los daños a todas las víctimas.
- 1253.** Sin embargo, en esta nueva fase de la investigación, se considera además, que dicha indemnización parcial, pudiera marcar la pauta, y un primer paso hacia un camino distinto, en el que eventualmente, puedan converger las víctimas y el Estado mexicano, en el camino y la consecución de la verdad y la justicia.
- 1254.** Vinculado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que para el debido funcionamiento de la **Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)**, se requiere que se destinen los recursos

económicos necesarios, para que ésta pueda desplegar sus actividades sin obstáculos ni dificultades, pero sobre todo, para el logro de su cometido.

1255. En ese orden de ideas, respetuosa y atentamente, se destaca la importancia de que se destinen los recursos presupuestarios que sean necesarias, para el adecuado funcionamiento de dicha comisión...”

- **QUEJA [REDACTED] DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO JUDICIAL.**

“... En efecto, la circunstancia que alude la parte quejosa, relativa a que la reparación integral del daño es una consecuencia necesaria de la declaración que llegue a emitirse en el juicio de amparo sobre la existencia de una violación de derechos humanos, no contravierte la determinación toral del a qua para desechar la ampliación de demanda, que se insiste, consistió en que su juicio, no se actualizó alguna de las hipótesis para la procedencia de tal figura jurídica.

Por el contrario, otorga soporte a la consideración del resolutor, en el sentido de que la reclamada reparación integral, en su caso, será materia de análisis al resolverse el fondo del asunto, por la cual – como motivo adicional– determinó que la ampliación presentada resulta improcedente...”

- **AMPARO EN REVISIÓN [REDACTED] DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO JUDICIAL.**

“... **SÉPTIMO. Análisis de fondo.**

Las demás agravios expuestas por el recurrente resultan sustancialmente fundados.

Cierta, en la primera parte del primero y en el segundo agravio, el inconforme sostiene que el secretario encargada del despacho del Juzgado de Distrito se apartó de la finalidad del juicio de amparo al excederse en la sentencia ya que condenó a las autoridades responsables a una medida de satisfacción que no fue materia del juicio, aun cuando su finalidad solamente es la de omproar y proteger a las gobernados en el caso especial sobre el que verse la demanda.

Al respecto, la parte inconforme agrega que la condena a la medida de compensación en caso de que pudiera resulta canducente, debía hacerse valer por una diversa vía al juicio de amparo, en términos del artículo 64 de la Ley General de Víctimas, porque además de que no fue solicitada por los quejasas, el juicio de amparo guarda una finalidad diversa, ya que únicamente podía mediante éste restituirse a las quejasas en los derechos que les fueran violados, sin poder incluirse en ese sentido una medida de satisfacción.

Asiste razón al inconforme.

Efectivamente, el juicio de amparo indirecto constituye una garantía extraordinaria otorgada a favor de los gobernados para la protección de sus derechos fundamentales, mediante la cual se constituye un instrumento dotada en su favor que tiene como finalidad verificar si las autoridades comunes actuaron con base y en estricto apego a las directrices y principios constitucionales de los que derivan las legislaciones secundarias, así como determinar si las actas de autoridad o de los particulares en las términos de la Ley de Amparo, se ajustan a las legislaciones secundarias, de tal manera que se estatuye como un medio extraordinario de defensa que sólo es procedente en los casos y en las condiciones que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan.

En efecta, la acción de amparo no es un derecho de acción procesal ordinaria civil, penal o administrativa que fundamentalmente consiste en motivar la prestación por parte del Estado de su actividad jurisdiccional para la declaración del derecho incierto de los particulares o del Estado como sujeto de derecho privada, y para la realización forzosa de sus intereses cuando su tutela sea cierta; sino que es

puramente constitucional, nace directamente de la Constitución; va dirigida a controlar el acto de la autoridad, no la ley común.

Por ende, al juicio de amparo no le incumbe ocuparse de la violación de derechos efectuada por particulares y entre particulares, ni los obstáculos que se opongan a la realización de la norma jurídica. La acción de amparo no tutela los intereses que en el acto jurisdiccional ordinario se han dejado a los tribunales comunes; sino que va dirigida a hacer respetar la propia Constitución cuando la autoridad ha rebasado sus límites.

De ahí que la sentencia de amparo no satisfaga de manera preferente intereses tutelados por la norma jurídica meramente legal o ley común; ya que, como culminación de la acción constitucional extraordinaria, se limita a amparar y proteger al agraviado sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare; y por ello el efecto jurídico de una sentencia de amparo es el de restituir al propio agraviado en el pleno goce del derecho fundamental que fue violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación si el acto reclamado es de carácter positivo, u obligando a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte lo que la legislación exija, si el acto es de naturaleza negativa.

De tal manera que las sentencias de amparo no son de simple anulación, sino que además deben producir efectos jurídicos concretos para restituir en el pleno goce del derecho fundamental violado por el acto de autoridad que no se ajustó al orden constitucional, porque el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, nulificando el acto reclamado e incluso los subsecuentes que sean una derivación de dicha transgresión, en virtud de que este medio extraordinario de defensa, debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, siendo menester que la sentencia que se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, produzca la restitución al agraviado en el pleno goce de su derecho, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo, o constituya una abstención, obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar siempre el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.

De lo que se sigue, que el efecto de la sentencia que otorga la protección al gobernado debe encontrarse directamente vinculada con la violación al derecho que se afectó, incluyendo las consecuencias que produzca, para que el estado de cosas que existía antes de la intervención de la autoridad que afectó la esfera jurídica del quejoso desaparezca por completo.

En este sentido, se debe acotar el hecho de que la sentencia de amparo no produce efectos constitutivos de derechos, los cuales sólo pueden materializarse cuando se reconozcan legalmente a través de los medios ordinarios de defensa y no se presente impedimento material o jurídico para ello, en la medida en que el órgano jurisdiccional de amparo debe limitarse a controlar el acto de autoridad reclamado, a través de su declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad nulificando el acto y sus consecuencias, más nunca llegando más allá de la violación que se detectó, pues debe existir congruencia en la afectación a que se contrae la declaración de violación de derechos del Juez de amparo con los efectos respectivos.

En el caso concreto se reclamó el que las autoridades responsable privaran a la parte quejosa de la posesión de su hijo, al enviarlo a un albergue del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia, en Tecate, Baja California, con lo que se trasgredió el derecho fundamental que tutela el ejercicio de la paternidad, afectando incluso al menor de edad a contar con una familia.

Por otra parte, en la sentencia recurrida se consideró que el acto reclamado violó los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y no discriminación, igualdad e interés superior de la

niñez, en atención a que la autoridad responsable se apoyó para privar de la posesión de la menor, en diversos medios de convicción que no eran válidos para tener por demostrado que no acreditaban el hecho de que la quejasa era una madre toxicómana, ya que era necesario que se le practicara un análisis pericial para tal efecto a fin de corroborar si arrojaba un resultado positivo para el uso de drogas, aunado a que el examen que se le realizó a la menor de edad era inconsistente pues se indicó que éste se practicó a una persona de sexo masculino, aun cuando la menor de edad era mujer; además, de que las pruebas periciales llevadas a cabo durante el trámite del juicio de amparo indicaron que no existían bases para demostrar sin lugar a duda, que en efecto la parte quejosa fuera una madre toxicómana, ni que la menor de edad presentaba síndrome de abstinencia.

De ahí que, con base en esos medulares argumentos, en la sentencia se determinó que se afectaran no solo los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, sino también que a su vez se trató de forma discriminatoria a la madre de la menor de edad, al considerarla como madre toxicómana, victimizándola al ordenarle con base en un diagnóstico ineffectivo, que reconociera su adicción a las drogas para someterse a un programa de reconstrucción personal.

Con base en esas violaciones a derechos fundamentales, se otorgó el amparo para que se anulara el acto de autoridad, ya que las lineamientos respectivos implican que las autoridades responsables emitieran un acto en el que dejaran insubsistente las ordenes y actuaciones en que se apoyó la orden en la que se privó de la posesión de la menor de edad a los quejosos; además, de que de forma inmediata se reincorporara a la menor al seno familiar.

Na obstante, en la sentencia se condenó a una medida de satisfacción para lograr una reparación integral a las quejasas, considerándolas como víctimas de las autoridades responsables.

Ciertamente, ante el hecho victimizante derivada de la actuación de las autoridades responsables, se consideró que era necesario como medidas de satisfacción: la emisión de una declaración oficial en la que se restableciera la dignidad, reputación y los derechos de los quejosos, y de las personas estrechamente vinculadas a ellos. Una disculpa pública, que incluyera el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades de las autoridades en la emisión de los actos reclamados. Una publicación en una de los periódicos de mayor circulación en el Estado, que contuviera una síntesis explicativa dirigida a la sociedad de los procedimientos a seguir ante la actualización del supuesto en que un recién nacido presente síntomas que sugieran que estuvo expuesta a la ingesta de narcóticos.

Conforme a lo expuesto, se desprende que asiste razón a la recurrente, ya que las medidas de satisfacción, no encuentran relación directa con los efectos que se debieron imprimir a la sentencia de amparo, ya que bastaba con anular el acto reclamado y ordenar la inmediata devolución al seno familiar de la menor de edad para restituir en el pleno goce de los derechos fundamentales de los peticionarios del amparo, ya que como se precisó las sentencias de amparo solo deben incluir entre sus efectos la restitución de los derechos fundamentales que fueron violentados, como si el acto no hubiera existido, lo que se lograba sin incluir las aludidas medidas de satisfacción, ya que no se violentaron los derechos públicamente del buen nombre o algún otro directamente vinculada con el acto de autoridad reclamado, que en su caso darían lugar a obligar a la autoridad a emitir una disculpa que incluyera a las personas estrechamente relacionadas con los quejosos, ni el elaborar una publicación periodística en los términos mencionados.

Efectivamente, en el particular el respecto a los derechos fundamentales conculcados con el acto de autoridad, se lograba con la destrucción del acto reclamado y sus efectos, sin que se pueda derivar de tal sentencia el efecto de obligar a la autoridad responsable a que emita otros actos de naturaleza diversas a las que motivó la mencionada protección, pues tal efecto ya iría más allá del citado restablecimiento. En este entendido, el juez de amparo puede señalar en la ejecutoria en cuestión entre otros alcances, el de condicionar la emisión de otra acta de las mismas características que el reclamado; lo que no aconteció

en el caso concreto, ya que la cuestión a analizar en el amparo era únicamente el hecho de que el acto mediante el que se privó de la posesión del menor afectado se ajustaba o no al orden constitucional, para en su caso anularlo y ordenar la restitución de éste al seno familiar.

Máxime, que una sentencia de amparo no puede servir como instrumento válido para cuantificar ni condenar al pago de una reparación integral a las víctimas.

En efecto, quienes prueben haber sido dañados con motivo de una actividad administrativa irregular del Estado, deberán acreditar que ésta constituyó una violación a un derecho o a diversos derechos humanos contenidos en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, para poder ser reparadas integralmente y, en algunos casos, el estándar de reparación integral podrá alcanzarse mediante una indemnización siempre y cuando no pueda restablecerse a la persona afectada a la situación en que se encontraba antes de la violación y la medida indemnizatoria o compensatoria sea suficiente para considerarla justa. Dicha cuantificación implica el que el juez cuantifique con base en criterios de razonabilidad, bajo el conocimiento de todas y cada una de las particularidades del caso cuales es la reparación respectiva.

De donde se sigue, que dicha reparación permite además de anular todas las consecuencias del acto de autoridad y restablecer la situación que debió haber antes de la intervención de la autoridad a condenar al pago de una indemnización justo como medida resarcitoria por los daños ocasionados, mediante la apreciación de la naturaleza y extensión del daño, lo cual incluye otras medidas compensatorias que no pueden ser alcanzadas mediante el juicio de amparo, ya que las sentencias de este medio de defensa extraordinario, como se precisó, solamente implican el anular el acto de autoridad para que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban, como si nunca hubiera existido, sin incluir la reparación del daño o bien el establecimiento de medidas de satisfacción, las cuales son necesarias para lograr una reparación integral.

Lo anterior se explica, al advertir que la medida que el concepto de reparación integral que se abordó en la sentencia de amparo, comprende el hecho de que las autoridades competentes, en las vías que corresponda, deben garantizar medidas adicionales como lo son las de satisfacción, rehabilitación o las garantías de no repetición necesarias y suficientes para reparar integralmente a las personas por los daños materiales o inmateriales derivados de la actividad administrativa irregular del Estado; mientras que el juicio de amparo se limita a ordenar la anulación del acto de autoridad y sus efectos inmediatos, lo cual no incluye medidas de satisfacción ni de reparación de daño material o inmaterial, en tanto que la extensión que debe abarcar esa reparación integral constituye un derecho dudoso que debe ser cuantificado con base en pruebas ofrecidas para tal efecto, mientras que en el juicio de amparo solo se verifica si la autoridad se ajustó al orden constitucional.

Se invoca como apoyo, la tesis aislada P. XXXIX/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Octubre de dos mil catorce, Tomo I, página 203, que dice:

"SENTENCIA DE AMPARO. SÓLO RESTITUYE EL ESTADO DE COSAS QUE IMPERABA ANTES DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AFECTADO, SIN PRODUCIR EFECTOS CONSTITUTIVOS DE DERECHOS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La concesión del amparo restituye al gobernado en el pleno goce del derecho fundamental afectado, por lo que restablece las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto es de carácter positivo, o bien, ordena que se obre en el sentido de respetar el derecho transgredido, si el acto es negativo. Por lo mismo, si al presentar la demanda de amparo existía incertidumbre o indefinición con respecto a dicha situación jurídica, la autoridad de amparo no debe pronunciarse sobre derechos en disputa, que aunque estuvieran relacionados con la materia del amparo, deben dirimirse en los juicios correspondientes. Por el contrario, el órgano jurisdiccional de amparo debe limitarse a controlar el acto de autoridad

reclamada, a través de su declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad. Así, el juicio de amparo, como medio de control constitucional, no produce efectos constitutivos de derechos, los cuales sólo podrán materializarse cuando se reconozcan legalmente a través de los medios ordinarios de defensa y no se presente impedimento material o jurídico para ello."

Igualmente se invoca la diversa tesis aislada 1a. CLXII/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte que se advierte de la página 802 del tomo I del libro 5 relativo a abril de dos mil catorce de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto:

"DERECHOS A UNA REPARACIÓN INTEGRAL Y A UNA JUSTA INDEMNIZACIÓN POR PARTE DEL ESTADO. SU RELACIÓN Y ALCANCE. El artículo 113, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de las particulares a obtener una indemnización en caso de que el Estado, a través de sus servidores públicos, cause un daño en su patrimonio, sea en el plano material o inmaterial, con motivo de su actividad administrativa irregular, mientras el párrafo tercero del artículo 1o. constitucional prevé la obligación del Estado de reparar las violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con lo anterior, quienes prueben haber sido dañados en su patrimonio con motivo de una actividad administrativa irregular del Estado, deberán acreditar que ésta constituyó una violación a un derecho o a diversos derechos humanos contenidos en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, para poder ser reparados integralmente y, en algunos casos, el estándar de reparación integral podrá alcanzarse mediante una indemnización, como la prevé el párrafo segundo del artículo 113 constitucional, siempre y cuando no pueda restablecerse a la persona afectada a la situación en que se encontraba antes de la violación y la medida indemnizatoria o compensatoria sea suficiente para considerarlo justo. Sin embargo, si en otros casos la indemnización fuera insuficiente para alcanzar el estándar de reparación integral, las autoridades competentes deben garantizar medidas adicionales -como lo son las de satisfacción, rehabilitación o las garantías de no repetición- que sean necesarias y suficientes para reparar integralmente a las personas por los daños materiales o inmateriales derivados de la actividad administrativa irregular del Estado que impliquen violaciones o sus derechos humanos, en términos del párrafo tercero del artículo 1o. constitucional."

De ahí que en la sentencia recurrida no podía jurídicamente incluirse entre los efectos del amparo la generación del derecho a la reparación integral por la actuación irregular del estado, porque tales circunstancias escapan a los fines del Juicio de amparo, en la medida en que éstas solo pueden resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclama, mas no sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales del orden común, tales como la exigencia de algún tipo de responsabilidad de índole patrimonial o de satisfacción, porque de lo contrario se desnaturalizaría sus fines constituyéndolo como un tribunal ordinario.

Sin que sea obstáculo a lo anterior la circunstancia de que tanto el artículo 1° de la Constitución, como el 1° de la Ley General de Víctimas, establezcan que las autoridades se encuentran obligadas a reparar las violaciones a los derechos humanos y que en todos los ámbitos de gobierno, se deba velar porque las víctimas cuentan con una reparación integral.

En efecto, los mencionados preceptos disponen lo que sigue:

"Art. 1a.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

"Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en toda el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1a., párrafo tercero, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona.

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante."

Del contenido del artículo 1° de la Constitución se obtiene que todas las autoridades del país deben garantizar tanto el respeto y como la protección de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, el precepta 1° de la Ley General de Víctimas, dispone que todas las autoridades y Poderes Constitucionales, están obligados a velar por la protección de las víctimas, debiendo proporcionarles ayuda, asistencia e incluso de ser el caso otorgarles una reparación integral.

No obstante, ambos preceptos legales delimitan puntualmente que para el cumplimiento de dichas obligaciones, se debe atender siempre, el ámbito de las competencias a cada una de las autoridades del poder pública corresponda.

En estas circunstancias, se concluye que todas las autoridades deben actuar ante la violación de derechos humanos de las víctimas, siempre bajo el ámbito de sus competencias, lo cual de manera alguna implica que en el juicio de amparo se pueda hacer una declaratoria de condena a la reparación integral de las víctimas, ya que las legislaciones en análisis puntualmente acotan el actuar de las autoridades siempre bajo la premisa de que se circunscriban a sus debidas competencias, es decir, aun cuando se amplió el margen de acción respecto a la tutela de los derechos humanos conforme al marco Constitucional que rige y en atención al derecho de las víctimas, tal circunstancia no implica que se deban desatender los fines del juicio de amparo cuyas sentencias no constituyen una medida de condena a la reparación integral, dado que las leyes hacen la observación de que las autoridades sólo pueden tutelar los derechos humanos y de las víctimas, en el ámbito de su competencia, es decir, respecto de las disposiciones que los legitiman en cada caso para actuar.

Lo anterior se explica, debido a que la reforma al artículo 1° de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, implicó un cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional, lo que aunado a la existencia de la Ley General de Víctimas, evidencian que se deben tutelar mayormente sus derechos. No obstante, esa transformación en el ámbito jurídico nacional de ninguna manera implica el que se dejen de observar las limitaciones en cuanto a las vías de acceso a la justicia demarcadas por el ámbito de competencia que permiten la acción de las autoridades.

De lo contrario, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de la función jurisdiccional, lo que resulta inadmisibles en la medida en que esa transformación de ninguna manera implica el dejar de ejercer las atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que la ley lo dispone, ya que se reitera las propias normas legales en estudio delimitan la actuación de las autoridades al ámbito de sus debidas competencias.

Se invoca como sustento la Jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo de dos mil catorce, tomo II, página 772, de rubro y texto:

"PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ella no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerla, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función."

Como corolario a lo expuesto, se debe destacar que los Jueces de Distrito y las Tribunales Colegiados de Circuito al conocer del juicio de amparo no están autorizados para aplicar directamente la Ley General de Víctimas, en tanto que si bien es cierta deben ejercer el control difuso de regularidad constitucional ante la violación de derechos humanos, sólo pueden hacerlo en el ámbito de su competencia, ya que solamente pueden aplicar en los casos a que se somete bajo su consideración las leyes que rigen a ese medio extraordinario de defensa, las cuales son la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles, tal como se desprende de lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1046/2012, en el que dispuso:

"...si bien los Tribunales Colegiados pueden ejercer de oficio el control difuso de regularidad constitucional, la cierto es que, deben hacerla en los términos dispuestos en el artículo 1° Constitucional, párrafo tercero, es decir, respecto de las disposiciones que ellos mismos están facultados para aplicar, específicamente, aquellas que rigen el procedimiento del juicio de amparo, a saber: Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Código Federal de Procedimientos Civiles, supletario de la Ley de Amparo..."

Apaya a la expuesta, la Tesis Aislada P. IX/2015 (10a.) del Pleno del Máximo Tribunal del País, que se encuentra en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, agosto de dos mil quince, Toma I, página 355, que dice:

"CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA. Por Imperativo del artículo 10., en relación con el diverso 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, deben garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, para lo cual cuentan con la facultad de ejercer un control de regularidad constitucional difuso o ex officio, que corresponde a un sistema que confía a cualquier autoridad, sin importar su fuero, la regularidad constitucional de las leyes y por virtud del cual toda autoridad debe, ante un caso concreto que verse sobre cualquier materia, inaplicar la norma que debería fundar su acto, si ésta es violatoria de un derecho humano contenido en la Carta Fundamental o en un tratado internacional. Ahora bien, cuando se habla del control ex officio debe tenerse presente que dicha expresión significa que ese tipo de examen pueden hacerlo, por virtud de su cargo de Jueces, aun cuando: 1) no sean de control constitucional; y, 2) no exista una salicitud expresa de las partes, pues la propia Norma Fundamental las faculta a inaplicar una norma cuando adviertan que viola derechos humanos, de manera que el control difuso no constituye un proceso constitucional sino sólo una técnica al alcance del Juez para que pueda ejercer un control de constitucionalidad en un proceso, sea éste constitucional o de cualquier otra naturaleza y cuyo ejercicio da lugar al dictado de una resolución con efectos entre las partes. En estas circunstancias, se concluye que los Tribunales Colegiados de Circuito, como órganos del Poder Judicial de la Federación, deben ejercer el control difuso de regularidad constitucional ante la violación de derechos humanos, con la observación de que sólo pueden hacerlo en el ámbito de su competencia, es decir, respecto de las disposiciones que ellas mismos están facultadas para aplicar, específicamente, las contenidas en los ordenamientos que rigen el procedimiento del juicio de amparo, esto es, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletario de aquélla."

Conforme a las premisas destacadas, se llega a la conclusión de que los agravios en análisis resultan fundadas, ya que en la sentencia de amparo no se debió emitir una condena a una medida de satisfacción, porque con ella se desconoció la finalidad y alcance que debe contener un fallo protector, el que se limita al restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes de la violación detectada o en su caso a obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental que se violó, más nunca puede servir para fincar condenas a medidas de satisfacción porque tal circunstancia escapa a la competencia de los jueces de amparo y a su propio fin.

De tal manera que, al imponer la condena a diversas medidas de satisfacción, el secretario que dictó la sentencia impugnada actuó ilegalmente, contra las instituciones y normas que rigen al juicio de amparo, ya que entre ellas no existen ninguna concernientes a declarar una condena en ese sentido, por lo cual las ejecutorias en el juicio de amparo no deben emitir ningún pronunciamiento a éste respecto; aunado a que las propias normas en que se apoyó para resolver en el sentido de dicha condena, no lo autorizaban para tal efecto, dado que tal como se precisó, tanto el artículo 1º de la Constitución, como el precepto 1º de la Ley General de Víctimas, puntual y sin lugar a duda, deja clara que para la reparación integral de las víctimas derivadas de la violación de sus derechos humanos se debe atender a las debidas competencias y al no hacerlo de esa forma. .

Se invoca para sustentar la anterior, por identidad jurídica sustancial, la Tesis Aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 2420 del Tomo LIX de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

CONCEPTO

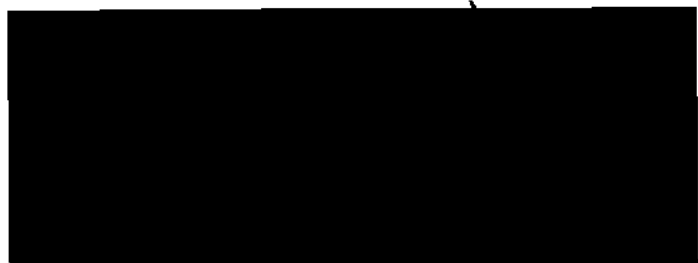
"COSTAS EN AMPARO, ES ILEGAL LA CONDENACION EN, COMO IMPORTE DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

Las costas son una institución de carácter procesal, aun cuando en principio puedan conceptuarse como una especie de daños y perjuicios originados por el abuso del derecho; consiguientemente, la facultad de hacerlas efectivas, no nace con el ejercicio de la acción, ni depende del resultado de ésta, ni se van causando durante el desarrollo del procedimiento, ni pueden ser objeto de estipulación contractual; pues son el resultado de la sentencia que hace la calificación de la actitud que las partes han observado durante el procedimiento, o impone la condena en acatamiento a la calificación hecha por la ley, en cuanto a la propia actitud, de acuerdo con los sistemas que adopta la misma ley. Ahora bien, como en las instituciones y normas que rigen al juicio de amparo, no existen algunas concernientes a las costas, las ejecutorias en el juicio de garantías ningún pronunciamiento hacen a éste respecto; de donde se infiere que no habiendo sentencia de condena, no se concede la facultad de hacerlas efectivas. Si pudieran exigirse por el concepto de daños y perjuicios, como consecuencia de valoración de los derechos cuya realización se persiguió ante la autoridad común, esto sería materia del ejercicio de la acción respectiva, con el objeto de lograr la condena para el causante de los daños, y entonces el derecho relativo sería resultado de la sentencia; y no existiendo ésta, no existe tampoco el derecho de hacer efectivas las costas. En consecuencia, si en un juicio de responsabilidad civil se dicta sentencia absolutoria, la parte actora apela de la sentencia; en segunda instancia se revoca aquélla y se condena al demandado al pago de las cantidades reclamadas y de las costas, el demandado promovió juicio de garantías contra el fallo de segunda instancia; se dicta sobreseimiento en el juicio; el tercero perjudicado inicia un incidente de costas, y el tribunal de alzada dicta fallo condenatorio en el propio incidente, se violan los artículos 14 y 16 constitucionales. Por otra parte, podría hasta surgir la cuestión relativa a la competencia que pudiera tener el tribunal del orden común, para hacer estimación de las costas en amparo y para ejecutar la resolución recaída en ese punto, y evidentemente existe esa falta de competencia, por que se trata de hacer efectivas las causadas en otra esfera constitucional. La intención del legislador en materia de amparo, de imponer en los casos de temeridad de los litigantes que en el intervienen, sanciones especiales y no la carga de cubrir las costas, se hace patente en los artículos de la ley actualmente en vigor y de la antigua, que establecen que cuando se sobresea un amparo o se niegue por haber sido interpuesto sin motivo, debe imponerse una multa al promovente y a su abogado, pues las causas de sobreseimiento, en lo general, implican temeridad o abuso del derecho, y al definirse cuando debe entenderse que se promovió el amparo sin motivo, se alude a verdaderos motivos para estimar temerario a quien no obtiene..."

Expuestos los criterios discrepantes y con fundamento en los artículos 215, 216, párrafo segundo, 225, 226, fracción II, penúltimo y último párrafo, 227, fracción II y relativos de la Ley de Amparo, pido:

ÚNICO: Se me tenga denunciando la contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito Judicial, Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito Judicial, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito Judicial y Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito Judicial.

San Pedro Garza García, Nuevo León a 22 de Octubre de 2018.



046203

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

388/2018

2018 NOV 6 AM 11:14

OFICINA DE
CERTIFICACION JUDICIAL
Y CORRESPONDENCIA

RECIBI DE UN ENVIADO
✓ SIN ANEXO Ed (16) Folios
VICTOR JUAN PIUZZ BARCENAS

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1_1.pdf
Secuencia: 2265066

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	MARIO ENRIQUE CAMACHO MARTINEZ	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	CAMM830822HDFMRR02			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e000000000000000000000009fb	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	06/11/2018T21:53:08Z / 06/11/2018T15:53:08-06:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	15 62 fd cf 6b af 40 c2 c3 3a 98 a5 7b 58 81 d5 d4 2c 21 83 0b 2c 88 a4 95 4a 83 63 67 a0 0a 86 ad 2a 56 5f d3 f4 b3 93 b1 a2 93 60 af 1c aa 96 1f 62 5a 88 10 e7 fe d0 a4 7a a9 e2 f1 09 b4 07 18 5c 11 7c cf 31 8a 05 00 4f 88 c9 9f 09 c7 fd bd 04 52 cb 59 19 51 f1 99 03 17 89 02 53 f1 df f5 06 85 d4 b1 7e 9a 23 5d d6 3a 59 7d 74 8d 8b 8e 30 c7 46 cc 86 e3 12 98 b0 56 f4 21 60 b9 9b 2e 84 5f de 90 ec f8 ba f0 e5 2a 5d f3 9e b7 0a ef 00 7b 90 a2 ad 7f c9 62 49 96 1a a8 1e 86 2f 84 3b 90 d8 9d c1 92 51 54 92 c1 01 b9 85 6c 71 1a b1 d5 39 b4 fd 42 4b 38 ce ad 1e 04 77 d7 75 e7 1a 9d 06 6d 7c 82 7d a0 3e 0a f1 c4 93 30 bf 82 4a c2 57 4b 15 30 8b 67 4c b4 3a 8a 95 34 44 a0 66 7a 56 ca 0e 1e 30 2c c5 ed 5e d0 72 0b ac ce d2 3f c2 6f 7b dd f1 d4 19 c2 c4 bb b4 f6 b7			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	06/11/2018T21:53:29Z / 06/11/2018T15:53:29-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e00000000000000000000000009fb			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	06/11/2018T21:53:08Z / 06/11/2018T15:53:08-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	2267948			
	Datos estampillados:	195ED928119C5E48D3BF7C18383BE5727E47D74B			